

### En esta edición

**Muchas incertidumbres sobre la próxima Ministerial de la OMC en Qatar.** Mientras las voces de apoyo a una nueva Ronda se multiplican, pocos avances se registran en las negociaciones en Ginebra. A casi tres meses del encuentro, la agenda sigue en un estado muy incipiente. Ver pag..... 7

**Algunos desarrollos importantes en América Latina que pueden incidir sobre el tratamiento del desarrollo sostenible en el ALCA:** Costa Rica firma un acuerdo ambiental con Canadá (sumándose a Chile que ya negoció uno), paralelo al acuerdo comercial que suscribieron, y el Mercosur aprueba su Protocolo Ambiental. Ver pags..... 5 y 11

**Finalmente, y sin la participación de EE.UU., se aprueba el Protocolo de Kioto,** uno de los acuerdos multilaterales ambientales más importantes de los últimos tiempos. Con menos fanfarria, se suscribió también el acuerdo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Ver pag..... 13

*Luego de tres años, PUENTES entra en un receso sine die. Este número incluye una encuesta a nuestros lectores, orientada a obtener información que nos permita mejorar la publicación en el futuro. Esperamos en estos años haber cumplido con nuestra misión de llevar a nuestros lectores información y análisis para facilitar la construcción de puentes entre el comercio internacional y el desarrollo sostenible. Como se señala en la nota de tapa, hay algunos avances que celebrar, y estamos en un momento propicio para reflexionar y volver a la carga con más energías.*

La Ley de Biodiversidad de Costa Rica	2
UE propone nuevas regulaciones para Organismos Genéticamente Modificados	9
Banano: UE y Ecuador logran acuerdo	10
Malasia pierde en caso "Camarón-Tortuga"	10
Negociaciones del Compromiso Internacional sobre recursos fitogenéticos	13

### ¿Hemos progresado?

Es un buen momento para hacerse esta pregunta. En medio de crisis múltiples en nuestra región, tres datos marcan el escenario del comercio y el desarrollo sostenible: a) la proliferación de indicadores de una desaceleración de la economía mundial; b) las grandes divisiones e incertidumbres sobre el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones durante la Ministerial de la OMC en Qatar el próximo noviembre; c) la ratificación por los gobiernos del hemisferio de la constitución del Area de Libre Comercio de las Américas en 2005.

Estos datos dan lugar a muchos interrogantes. ¿Será la desaceleración un incentivo para lanzar una ronda, para profundizar la liberalización hemisférica o para dar rienda suelta a los impulsos proteccionistas en EE.UU., Europa y Japón? Precisamente por la gravedad de estos interrogantes, este es un buen momento para preguntarse si la comunidad internacional ha avanzado en la integración del comercio internacional y el desarrollo sostenible. Señalemos cuatro niveles para observar:

- En los últimos años se han multiplicado en América Latina instrumentos jurídicos que abordan directamente esta cuestión. Véanse el Acuerdo de Cooperación Ambiental paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los acuerdos bilaterales de Chile y Costa Rica con Canadá (ver pag.5), la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y la aprobación del Acuerdo Marco Ambiental del Mercosur (ver pag.11). A nivel de países, se han creado oficinas encargadas de esta cuestión (como en Colombia y Chile), o normas como la ley de biodiversidad de Costa Rica que aborda el tema de la propiedad intelectual y la biodiversidad (ver pag.2). Pareciera que hay en la región una creciente conciencia sobre la importancia de que la política ambiental y la comercial vayan de la mano.
- También es notoria en los últimos años la incorporación del sector productivo latinoamericano a mejores prácticas motivadas por exigencias de los mercados de exportación. Con intensidad variable según el tipo y el país, lo cierto es que las certificaciones en la región van en franco aumento (p.ej., las certificaciones orgánicas, las certificaciones forestales, las ISO 14000, entre otras.), así como el desarrollo de productos no tradicionales asociados con un manejo sustentable de la biodiversidad.
- Los niveles de conciencia, conocimiento e involucramiento de las organizaciones de sociedad civil han crecido notablemente. Más aún, la presencia del tema en los medios masivos, y en consecuencia la llegada al público general, ha mejorado significativamente. Ya sea buscando el diálogo y la discusión de propuestas o tomándose las calles con espíritu crítico en todo el mundo, la sociedad civil está cada vez más comprometida.
- A nivel global, los mayores avances se dan en el marco de los AMUMA que se han aprobado (Protocolos de Cartagena y Kioto, acuerdos de PIC y POP). En cambio, es en la OMC donde menos avances se ven. Las discusiones en este foro están virtualmente estancadas desde la creación del organismo, con pocas excepciones. Dadas las complejidades de las relaciones asimétricas que se dan en el plano global, esto no sorprende a nadie.

Cuando comenzamos con *Puentes* hace tres años, pocos de los datos señalados arriba eran ciertos. Sin duda hay un movimiento positivo. Pero los avances que se registran son, en su gran mayoría, a nivel del discurso. Ni el sector productivo está suficientemente abordo, ni hay entre las organizaciones de sociedad civil la capacidad de incidencia efectiva deseable, y, en el plano oficial, todavía estamos en esa zona de riesgo en la que las palabras pueden nunca convertirse en políticas efectivas. Estamos recién en el comienzo de un cambio por venir.

# La Ley de Biodiversidad de Costa Rica: Armonía o conflicto entre los ADPIC y el CDB

Por Jorge Cabrera Medaglia\*

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha reafirmado los derechos soberanos de los países sobre sus recursos naturales, soberanía que poseía un fuerte arraigo y aceptación en el derecho internacional. A la vez establece como uno de sus objetivos la distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes del uso de los recursos biológicos, genéticos y bioquímicos y reconoce la necesidad de proteger los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales y los pueblos indígenas (Conocimiento Tradicional). Ninguno de estos aspectos es considerado por el Sistema de Propiedad Intelectual. En este orden de ideas, no han faltado quienes vean un conflicto entre el sistema de propiedad intelectual (especialmente por sus extensiones a la materia viva) y el CDB.

Si los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre material biológico representan una contradicción con el derecho soberano de cada Estado sobre los recursos genéticos, y en general, si la extensión de la protección por patentes y derechos de obtención vegetal al material biológico se oponen a los objetivos del Convenio, es un tema de un alto contenido emocional y político. Algunas organizaciones de carácter no gubernamental (GRAIN, GAIA, etc.) han venido insistiendo en el conflicto entre el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), y los objetivos del CDB, lo cual ha sido secundado por naciones como la India y otros países en desarrollo, especialmente del continente Africano.

En este orden de ideas, Costa Rica como signataria del CDB y del Acuerdo sobre los ADPIC, ha venido aplicando la legislación necesaria para darle cumplimiento a ambos acuerdos internacionales. Destaca en este sentido la formulación de una Ley de Biodiversidad en 1998, la cual consideró -algo poco usual en normativas de orden ambiental-, imperioso armonizar los tópicos de los Derechos de Propiedad Intelectual con la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y la tutela del conocimiento tradicional. Por ello, el proceso de formulación de la Ley de Biodiversidad y especialmente las materias relacionadas con el tema de la protección del conocimiento tradicional y los derechos de propiedad intelectual, han despertado gran interés a nivel internacional. Estas líneas pretenden compartir algunas reflexiones sobre las disposiciones relevantes de la Ley y sobre el proceso que condujo a su redacción.

<sup>1</sup> El concepto de sistemas *sui generis* contenido en el Acuerdo de los ADPIC resulta mucho más limitado y condicionado por las características de este Acuerdo y por ende deviene diferente a la noción de un sistema *sui generis* en el sentido de particular, de su propia clase, que pueda desarrollarse para proteger los CT, independientemente de las referencias del art. 27.

## La protección del conocimiento tradicional en la Ley de Biodiversidad

Se analizó un amplio abanico de opciones para establecer las disposiciones legales destinadas a proteger los conocimientos tradicionales. Los problemas para aplicar mecanismos existentes para la protección de estos conocimientos, innovaciones y prácticas han sido puestos en evidencia por documentos desde las más variadas ópticas. Si bien es cierto que han sido esbozadas algunas iniciativas para el uso de mecanismos tradicionales relacionados con la propiedad intelectual tales como las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las marcas colectivas, los derechos de autor y conexos, secretos comerciales, patentes de invención, derechos de obtención, etc.; existen fuertes discrepancias al respecto y se ha mencionado la necesidad de desarrollar esquemas *sui generis* de protección; materia sobre la cual se han presentado ya algunas propuestas concretas a nivel de naciones en Perú, Tailandia, Venezuela, Panamá y Costa Rica y a nivel de organizaciones como en La Red del Tercer Mundo, entre otras.

Igualmente algunos han sugerido modelos para proteger el conocimiento tradicional (CT) a la luz de la obligación del artículo 27.3.b) del Acuerdo de los ADPIC, desarrollando el concepto de protección *sui generis* que menciona dicho numeral. Se ha insistido en la forma como estos esquemas *sui generis* (compatibles con el mandato del 27.3.b) aunque evidentemente limitados en este caso a las particularidades del

mismo, pueden ser utilizados para proteger este conocimiento en el marco de la OMC<sup>1</sup>.

El sistema costarricense de protección del conocimiento tradicional se fundamenta en varias premisas que es necesario exponer brevemente:

- a) El esquema legal de acceso asegura el consentimiento informado previo y la distribución de beneficios tratándose de conocimientos tradicionales, para lo cual la Oficina Técnica y eventualmente la misma Comisión Nacional de Biodiversidad (CONAGEBIO), tiene potestades de control, autorización y revisión (arts. 63, 65, 66 y 72, entre otros).
- b) Desde este punto de vista se trata de una combinación entre mecanismos de acceso, contratos o licencias y un esquema *sui generis* basado en registros.
- c) Se reconoce la existencia y validez de las distintas formas de conocimiento e innovación y la necesidad de protegerlas mediante el uso de los mecanismos apropiados (art.

Continúa en la página 3

*Continuación de la página 2*

- 77), sean patentes, secretos comerciales, derechos de autor, derechos del fitomejorador, derechos intelectuales comunitarios *sui generis*, etc. (art. 78).
- d) La legislación se orienta a la protección de los conocimientos mediante un sistema de registro, tema que ha sido apoyado por la doctrina y que en términos prácticos ha sido puesto en marcha en la India, Venezuela y en el borrador de la propuesta peruana de Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Acceso a los Recursos Genéticos, entre otros. Así se procederá a inventariar los derechos comunitarios intelectuales *sui generis* que las comunidades soliciten proteger (art. 84). No obstante, estos esquemas de registro han sido criticados por las dificultades que pueden traer consigo: la necesidad de definir el acceso a la información; el control ejercido sobre la misma; la posibilidad que comunidades no involucradas en el acceso otorguen el consentimiento previo para conocimientos registrados a nombre de otros; limitaciones para la restricción del acceso a la información, etc.
- e) Para la definición del ámbito, la naturaleza y los requisitos de estos derechos se debe iniciar un proceso participativo de consulta con las comunidades indígenas y campesinas (art. 83 de la Ley de Biodiversidad). Igualmente, el proceso determinará la forma en que el derecho intelectual comunitario será utilizado y quién ejercerá la titularidad e identificará a los destinatarios de los beneficios (art. 85).

En este orden de ideas, a efectos de asignar derechos y obligaciones, sean colectivos o privados, debe haber claridad sobre la materia a ser protegida, el procedimiento para la protección, los derechos otorgados y contra quién se hacen valer los mismos y, los mecanismos de observancia.

En el caso costarricense se han definido algunos de estos temas y otros serán determinados mediante el proceso de consulta:

**La materia a proteger:** resultan los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales y los pueblos indígenas, términos estos que no se definen. Se trata de aquellos asociados a los elementos genéticos y bioquímicos (art. 82), ello implica los conocimientos en materia de medicina, agricultura, etc., pero deja por fuera las expresiones del folklore. Caso contrario de la reciente Ley panameña (No. 26 de junio del 2000) "[d]el régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas", que regula únicamente este tema.

No obstante aún deben definirse algunos puntos como los requisitos para determinar la materia "protegible" y las potestades de la entidad a cargo del Registro (en este caso la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, art. 84). En caso contrario, se corre el riesgo de sustraer del dominio público más de lo debido, crear demandas especulativas y en general impedir conocer el alcance de los derechos y las obligaciones de terceros y de acciones que infrinjan los derechos acordados.

**El procedimiento de registro:** en el caso costarricense resulta voluntario y declarativo, gratuito, oficioso, informal y de duración indeterminada. Otros elementos como la posibilidad de oposición, la existencia de un examinador conocedor del tema, la reciprocidad de reconocimiento al derecho de otros países, los causales de revocación y nulidad, las apelaciones, etc., deben ser indicados. La relación entre esta protección y otras que puedan reclamarse mediante el esquema tradicional de DPI igualmente debe ser reconocida (v.g. marcas, indicaciones geográficas, etc.).

**Derechos otorgados:** la Ley costarricense es escueta en el tema, pero pueden extraerse de varias disposiciones: la imposibilidad de otorgar derechos de propiedad intelectual sobre los mismos; la necesidad del consentimiento informado previo y de términos mutuamente acordados para los beneficios en el caso de acceso y uso; derecho de objeción cultural para oponerse a su uso por razones religiosas, etc. En general deben definirse los derechos derivados de la existencia de los derechos comunitarios intelectuales *sui generis*. Otro punto a regular radica en el carácter colectivo por oposición al privado de los mismos. La Ley menciona su carácter comunitario, lo cual no implica necesariamente que no puedan ser privados. En ese sentido, sobre todo en comunidades locales la presunción de que todos los conocimientos son generados en forma colectiva, es difícil de sostener.

**Observancia de los derechos:** si no se prevén mecanismos sustantivos de observancia de los mismos, las regulaciones de protección serán insuficientes. Este punto ha sido poco abordado en la Ley costarricense. Tan solo se contempla esta posibilidad a través de: la multa por acceso ilegal; mediante la necesidad de presentar el denominado certificado de origen y el requisito que implica para la aprobación de derechos de propiedad intelectual; la consulta obligatoria a la Oficina Técnica de la CONAGEBIO de las solicitudes de DPI que hagan uso de recursos o conocimientos; y, el carácter vinculante de la oposición de esta, etc. La Ley panameña y la venezolana (Ley de Biodiversidad, No 5468 de mayo del 2000), contemplan mayores provisiones sobre sanciones civiles y penales, medidas administrativas, etc.

En definitiva el éxito del esquema previsto dependerá en gran medida de la existencia de la reglamentación y del proceso participativo de consulta sobre los alcances de los mismos. Para ello se puede echar mano de la experiencia de la India, el borrador peruano y la documentación y registro en bases de datos que se está gestando en Venezuela, entre otros.

### **La relación entre el acceso, el conocimiento tradicional y los derechos de propiedad intelectual en el marco de la Ley**

Durante el proceso de redacción de la Ley de Biodiversidad y como parte de la elaboración de las regulaciones sobre acceso y distribución de beneficios, surgió inevitablemente el tópico de los derechos de propiedad intelectual y su relación con los mismos. El propio artículo 16 del CDB reconoce que estos derechos deben apoyar y no oponerse a los objetivos

*Continúa en la página 4*

*Continuación de la página 3*

del Convenio. Sobre el tema han surgido diversas posiciones, algunas de las cuales afirman la completa incompatibilidad entre el CDB y las recientes evoluciones de los derechos de propiedad intelectual.

De esta manera, la Ley de Biodiversidad establece la necesidad que los derechos de propiedad intelectual sean congruentes con los objetivos de la Ley en virtud del principio de integración (art. 79). La Ley excluye de la patentabilidad a: las secuencias de ADN per sé; las plantas y animales; los microorganismos no modificados; los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales; los procesos o ciclos naturales en sí mismos; las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado o prácticas biológicas tradicionales o en el dominio público; las invenciones que, al ser explotadas en forma monopólica puedan afectar los procesos o productos agropecuarios considerados básicos para la alimentación y la salud (art. 78).

Algunos han afirmado la contradicción de ciertas cláusulas con el Acuerdo sobre los ADPIC, y por tanto, según el esquema costarricense, con la Constitución misma, pues en nuestro ordenamiento los tratados tienen valor superior a la Ley ordinaria y no pueden ser desatendidos por ésta.

Al mismo tiempo, vale resaltar algunos interrogantes importantes que en forma expresa o implícita, fueron la causa de estas regulaciones:

- ¿Son siempre insuficientes los sistemas tradicionales de DPI para proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas, como afirma la mayoría de la doctrina o por el contrario, pueden ser utilizados para proteger sectores importantes de los mismos, por ejemplo, mediante el uso de marcas, denominaciones de origen, etc.?
- ¿Qué posibilidades existen de que los DPI creen valor para la biodiversidad y el conocimiento asociado -en forma indirecta- al proteger un mercado de productos que utiliza recursos genéticos? Si la respuesta en este caso resulta positiva, ¿qué tanto pueden estos mecanismos servir para reclamar ese valor?
- ¿Es posible y viable establecer el denominado Certificado de origen de forma que sea requisito presentar una constancia o documento sobre la legalidad del acceso y la distribución de los beneficios, previo a otorgar derechos de propiedad intelectual sobre productos o procesos que hayan utilizado recur-

**(...) el éxito del esquema previsto dependerá en gran medida de la existencia de la reglamentación y del proceso participativo de consulta sobre los alcances de los mismos.**

sos genéticos y CT? El tema se ha venido discutiendo en la OMC, fundamentalmente en el Consejo de los ADPIC y en el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA), en el cual diferentes países y bloques han presentado propuestas para incluir la misma en el texto revisado de estos. Asimismo, otros foros como el Tratado de Patentes de la OMPI y el Grupo de Trabajo sobre Biotecnología han abordado el tópico y posiblemente el recién creado Comité Intergubernamental sobre Conocimiento Tradicional, Recursos Genéticos y Folklore, lo estudie y formule recomendaciones. A la vez, debe considerarse que diversas objeciones se han levantado contra la misma, desde su incompatibilidad con los requisitos taxativos de patentabilidad de la OMC (art. 27 del Acuerdo sobre los ADPIC) hasta críticas de orden práctico, como las dificultades tratándose de variedades vegetales cuyo origen proviene de diferentes países y cruces y retrocruces.

- ¿En qué medida los derechos de propiedad intelectual impactan la biodiversidad, por ejemplo mediante restricciones al intercambio de semillas a través de patentes, derechos de obtención, contratos o tecnología de control de expresión de genes? ¿Hasta donde pueden producirse impedimentos en las prácticas tradicionales debido a patentes u

otros derechos otorgados a invenciones que reclaman el uso de recursos genéticos, aún si desde el punto de vista legal, nunca debieron otorgarse por no ser nuevos o carecer de nivel inventivo? - como se ha argumentado sobre el Neem, el Turmeric o la planta de ayahuasca, muchos de los cuales han sido revocados en los Estados Unidos o Europa. ¿Pueden restringir las exportaciones de productos tradicionales (frijol en México<sup>2</sup>, etc.) mediante la alegación de la existencia de dere-

chos de obtención o patentes concedidos en el mercado de importación a terceros, sobre rasgos de estos productos?

- ¿Hasta donde los DPI tienen un impacto directo en el ambiente y en la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales? Por ejemplo, ¿hasta donde facilitan o dificultan la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas; crean o no efectos negativos como la erosión genética; el aumento en el uso de químicos de síntesis (especialmente tratándose de la venta de semillas transgénicas que son resistentes a herbicidas); orientan la investigación y el desarrollo hacia áreas que no son deseadas y crean una agricultura homogénea y poco adaptada a las necesidades locales, etc.?
- ¿Puede echarse mano del sistema *sui generis* para las variedades vegetales previsto por la OMC en su artículo 27.3.b) para proteger conocimientos tradicionales, estipular la distribución de beneficios, etc., pese a que en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC esta expresión adquiere un significado singular?
- ¿Permite la estipulación de los DPI en contratos de acceso, garantizar mayores retornos a los países de origen o

<sup>2</sup> En diciembre de 1999, la empresa POD-NERS de los Estados Unidos inició una acción legal con las importaciones de frijol provenientes de México, alegando que las mismas infringían DPI sobre variedades de frijol, las cuales aparentemente descenden de variedades ampliamente consumidas por los mexicanos. De hecho, el origen de la adquisición del material genético se remonta a la compra efectuada por el Presidente de dicha compañía de una bolsa de semilla comercial en Sonora. El demandante solicita regalías cercanas a los 6 centavos de dólar por libra de frijol.

# El Tratado de Libre Comercio Canadá - Costa Rica: Un Potencial Aporte para las Américas

Por Mónica Araya\*

Poco después de la conclusión de la III Cumbre de las Américas en abril del 2001, Canadá y Costa Rica firmaron un tratado de libre comercio tras casi un año de negociaciones. La relación económica de ambos países involucra tan sólo una pequeña porción de los flujos totales de comercio y inversión de las Américas y, por lo tanto, no se espera que provoque un efecto comercial significativo en el hemisferio. Sin embargo, vale la pena preguntarse si hay algunos elementos de esta negociación que pueden ser útiles a la integración hemisférica, un proceso que como bien se sabe continúa generando una contrastante dosis de entusiasmo y oposición.

Muchos gobiernos latinoamericanos han confesado su escepticismo sobre la profundidad del compromiso de los Estados Unidos con respecto a la creación de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) hacia el 2005. Dudas que se transforman en una abierta desconfianza cuando temas como 'protección ambiental'-tradicionalmente excluidos de las negociaciones-son traídos a colación en el proceso del ALCA. Hasta la fecha no ha sido posible abordar el tema ambiental de manera consensual: mientras algunas propuestas para incluir el tema son calificadas como 'excesivas' (por ejemplo, el uso de sanciones) o 'innecesarias' (por ejemplo, la creación de un grupo de estudio del tema), otras son criticadas por ser terriblemente insensibles al tema ambiental (por ejemplo mantener el *status quo*).

En suma, el tema ambiental ha llegado a convertirse en un 'rompecabezas hemisférico' con elocuentes partidarios y detractores. Pero a pesar de que la solución al rompecabezas aún no existe, una cosa sí parece clara: el escenario de un ALCA sin componente ambiental alguno es poco probable *vis-à-vis* la organizada oposición a nuevas negociaciones comerciales, sobre todo si estas excluyen temas como el ambiental. Así, un escenario plausible es que conforme nos acerquemos al 2005, el dilema no sea tanto el de si se deben enfrentar las preocupaciones ambientales, sino más bien cómo y cuáles preocupaciones.

Es justamente en esta búsqueda por una salida a una polarizada discusión que adquiere relevancia el tratado de libre comercio entre Canadá y Costa Rica; lo que aquí se sugiere es que hay elementos de la fórmula de 'comercio y ambiente' de este proceso bilateral que podrían explorarse en el contexto hemisférico.

## Las motivaciones del acuerdo comercial

Tanto el gobierno canadiense como el costarricense vieron en este tratado de libre comercio (TLC) una oportunidad de mutuo beneficio que acentuaría la naturaleza complementaria de sus flujos comerciales (cerca de 269 millones de dólares en el 2.000) y fortalecería una relación bilateral que tradicionalmente ha gozado de muy buena salud. Tanto el colapso de las nego-

ciaciones comerciales multilaterales en Seattle como la incertidumbre respecto al ALCA (por ejemplo la falta de la autorización por la vía rápida, *fast-track*, en los EE.UU. o las ambiguas señales que se reciben del Mercosur) añadieron *momentum* para la solicitud costarricense de negociar un tratado de libre comercio. Costa Rica ha disfrutado de un considerable superávit comercial con Canadá y la mayoría de sus productos ya entran a Canadá libre de aranceles. Pero la existencia de notables excepciones (particularmente, productos agrícolas, textiles y maquinaria) convirtió al TLC en una meta relevante. Adicionalmente, el gobierno costarricense buscaba atraer mayores niveles de inversión canadiense, así como también enviar señales de su claro compromiso con el desarrollo de una zona de libre comercio con Estados Unidos en el futuro, con o sin el ALCA.

Por su parte, el gobierno canadiense quería enviar una señal de compromiso con el hemisferio. Adicionalmente, Costa Rica ofrece características que la posicionan como un mercado perfecto para que las empresas canadienses de pequeña y media-

na escala ganen experiencia en el acceso a mercados en la región. La meta de Canadá era eliminar las tarifas a ciertos productos clave (por ejemplo, productos de papel, partes de coches, y plásticos), además de reducir las trabas burocráticas y facilitar procedimientos aduaneros para aquellos empresarios canadienses con negocios en Costa Rica. Otro objetivo canadiense fue el explorar un marco de política de competencia que sirviera de modelo para el hemisferio en el futuro.

Este TLC, a pesar de algunas diferencias, posee una estructura similar a la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) incluyendo así disposiciones en materia de servicios, inversiones y solución de controversias. Para manejar la asimetría de las dos economías, Canadá liberalizará su mercado más rápido de lo que lo hará Costa Rica.

Este TLC, a pesar de algunas diferencias, posee una estructura similar a la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) incluyendo así disposiciones en materia de servicios, inversiones y solución de controversias. Para manejar la asimetría de las dos economías, Canadá liberalizará su mercado más rápido de lo que lo hará Costa Rica.

Dos grandes logros de esta negociación fueron el desarrollo de un marco para la política de competencia que podría servir como modelo para el resto de la región, además de innovadoras disposiciones en el tema de facilitación de comercio. Adicionalmente, se firmó una declaración en materia de comercio electrónico. Las disciplinas en materia de inversión están vinculadas con el acuerdo bilateral de protección a las inversiones firmado en 1998 que provee un conjunto de garantías sustantivas y de procedimiento para las inversiones y los inversionistas extranjeros.

## ¿Cómo se abordó el tema ambiental?

A pesar de la falta de entusiasmo por parte de los negociadores costarricenses, el TLC fue complementado con un acuer-

*Continúa en la página 6*

*Continuación de la página 5*

do de cooperación ambiental (y otro en materia laboral). Aunque el acuerdo paralelo está basado en los modelos del TLCAN y del TLC Canadá- Chile también existen varias diferencias. Las características generales del modelo ambiental negociado incluyen:

- **Cumplimiento de la Ley:** Los países se comprometen a cumplir con sus leyes ambientales y con la existencia de procedimientos *domésticos* para sancionar eventuales violaciones. Las personas interesadas pueden solicitar al gobierno que investigue una violación a la ley.
- **Participación Pública:** Un individuo o una organización no gubernamental puede solicitar una respuesta de cualquiera de los dos países con respecto al cumplimiento efectivo de sus leyes y regulaciones ambientales. El resumen tanto de la solicitud como de la respuesta será público.
- **Cooperación:** Una lista indicativa de las posibles prioridades de cooperación sugiere: sistemas de manejo ambiental, el papel del público en la creación de la política ambiental y la eficiencia en materia de conservación de la biodiversidad así como el uso sostenible de los recursos naturales.
- **Aplicación:** ambos gobiernos se reunirán por lo menos cada dos años para revisar el progreso general. Sin embargo, las reuniones sobre los aspectos específicos de la cooperación serán más frecuentes.
- **Diferencias importantes:** Bajo el acuerdo negociado un eventual incumplimiento de la ley no se castigará con sanciones comerciales (como en caso del modelo ambiental del TLCAN) ni con multas (como en el acuerdo ambiental del TLC Canadá-Chile) sino que se exploran canales más cooperativos. Otra diferencia es que no creó una comisión ambiental bilateral y los arreglos en cuanto al financiamiento se harán para cada caso individualmente. Finalmente, el acuerdo paralelo no estableció un sistema de solución de controversias.

### **Relevancia para las Américas**

Este acuerdo paralelo seguramente generará cumplidos, así como críticas, pero el elemento clave para aprobarlo o rechazarlo es el enfoque que uno tenga respecto a las 'sanciones'. Aquellos que consideran que la vía más efectiva para mejorar el récord ambiental (o laboral) en América Latina es a través de sanciones, concluirán que la relevancia de este acuerdo paralelo es muy limitada ya que no 'castiga' los posibles incumplimientos.

Pero, si la premisa es que las sanciones comerciales no son la vía apropiada para 'enverdecer' las negociaciones comerciales, entonces se puede calificar el modelo acordado por Canadá y Costa Rica como un precedente importante. Las sanciones comerciales por motivos ambientales son usualmente ofensivas e injustas porque no pueden ser usadas de manera balanceada, especialmente cuando son las economías pequeñas las que buscan castigar a un país mucho más grande y poderoso. Adicionalmente, la experiencia en las Américas ha mostrado que los logros en materia ambiental relacionados con el TLCAN y con el TLC Canadá-Chile fueron inducidos por el espíritu cooperativo de los acuerdos paralelos, no por la amenaza de sanciones o multas.

Otra razón de porqué el enfoque Canadá-Costa Rica podría recibir atención en el futuro es que podría servir de modelo para las eventuales negociaciones de un tratado comercial entre Canadá con otros países de la región centroamericana y caribeña. No es irrazonable pensar que conforme más países sigan un enfoque comercial-ambiental libre de sanciones que les permita beneficiarse a través de programas de cooperación, más se debilitará la intransigencia de ciertas posiciones que rechazan cualquier vínculo comercial-ambiental.

Pero, la fórmula ambiental Canadá-Costa Rica no es perfecta. La principal debilidad es que no ofrece respuesta alguna a un cuestionamiento central de la comunidad ambiental: el potencial impacto negativo de las disposiciones en materia de inversión extranjera sobre la autonomía regulatoria de los países receptores. Sin embargo, este es un debate para el cual no hay recetas fáciles, así que no hubiera sido posible resolverlo en el TLC Canadá-Costa Rica.

El punto que hay que destacar es que Canadá merece buena parte del crédito por promover un modelo ambiental, que no sólo reconoce las demandas internas (del tipo "un TLC sin un componente ambiental es inaceptable") sino también reconoce algunas voces en América Latina (en particular la preferencia por enfoques 'libre de sanciones'). Este esfuerzo por acomodarse al 'sur' es inusual y contrasta con la preferencia de Estados Unidos de dictar fórmulas más unilaterales (por ejemplo, sanciones) sin importar si éstas funcionan o no en el contexto latinoamericano.

Sin embargo, el reciente retroceso en materia ambiental que el resto del mundo percibe ha ocurrido en Estados Unidos podría afectar la posición de dicha nación en materia de sanciones comerciales por motivos ambientales. La frustración de la comunidad internacional con respecto a la falta de apoyo estadounidense al Protocolo de Kioto y a la propuesta de un nuevo plan energético con más buenas noticias para la industria petrolera y del carbón que para el ambiente (en particular para el Refugio Nacional en Alaska) debilitarán futuros esfuerzos de la Administración Bush de disciplinar el comportamiento ambiental de los demás países a través de sanciones. Una comunidad internacional escéptica con respecto al liderazgo ambiental de Estados Unidos es una realidad que los miembros del congreso estadounidense (y los grupos de interés a quienes senadores y congresistas obedecen) deben enfrentar tarde o temprano. Aunque éstos grupos en Estados Unidos tienen razón en promover un ALCA más amigable con el ambiente o los trabajadores, se equivocan al sujetar su apoyo a la agenda comercial a la existencia de sanciones en materia ambiental (o laboral).

Aún no es claro cuál podría ser una fórmula exitosa para el ALCA en materia comercial-ambiental. Pero el esfuerzo de Canadá de promover la cooperación y de negociar -en vez de imponer- los temas ambientales en una negociación comercial con un país mucho más pequeño es ciertamente bienvenido como un precedente positivo en las Américas.

\* Mónica Araya es Directora del Proyecto "Sustainable Américas" del Centro de Derecho y Política Ambiental de la Universidad de Yale e investigadora del consorcio Global Environment & Trade Study (GETS).

## A 100 días de Qatar, la Ronda sigue lejos

*A la par que continúan las reuniones en la OMC con el fin de delinear el contenido de la Declaración de la Ministerial de Doha, la decisión de iniciar una nueva ronda de negociaciones sigue presentándose como la única posibilidad de establecer nuevos acuerdos y destrabar temas clave. Pero las posiciones siguen muy divergentes. Estos meses vieron también fuertes debates en torno a los ADPIC e importantes avances en la adhesión de China a la OMC.*

En la reciente reunión informal del Consejo General de la OMC que se llevó a cabo el 30 y el 31 de julio, los miembros seguían aún lejos de llegar a acuerdos en torno a la agenda para la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC a realizarse del 9 al 13 de noviembre en Doha, Qatar. A casi 100 días de esta reunión no existía aún consenso para la redacción de la Declaración Ministerial. El director general de la OMC Mike Moore, hizo un llamado a los miembros en el sentido de que si no se aprovecha el momento para iniciar una nueva ronda de negociaciones, muchos países optarán por llegar a acuerdos bilaterales o regionales, un proceso en el que muy probablemente quedarán por fuera los países más pobres. Un segundo fracaso en el relanzamiento de una nueva ronda de negociaciones multilaterales, después de Seattle, "nos condenará sin duda a un largo período de irrelevancia", expresó Moore.

La situación actual de estancamiento y la reticencia de algunos países en desarrollo al relanzamiento de las negociaciones parecen indicar que no habrá avances en ningún tema antes o en Doha, hasta tanto sea resuelto el asunto de la aplicación de los acuerdos de la Ronda de Uruguay. Tras un mes de receso en la OMC, Moore invitó a los miembros para que a comienzos de septiembre estén listos para negociaciones intensivas a fin de elaborar un borrador coherente de la Declaración Ministerial que les permita llegar a Doha con un documento que exprese acuerdos substanciales. Moore dijo que "optar por el status quo no evitará que se lleven a cabo futuras negociaciones" las cuales podrían tener lugar por fuera de la OMC y reiteró que los más afectados por el no relanzamiento de una nueva ronda de negociaciones serán los países en desarrollo.

Entretanto, los ministros de comercio de los 49 países menos desarrollados reunidos en Tanzania el 23 y 24 de julio, conformaron un frente común con miras a las Ministerial de Doha y delinearon su propia agenda, en la cual demandan "avances substanciales en cuanto a los asuntos de aplicación" y "un compromiso que garantice un proceso de negociación transparente y participativo antes, durante y después de Doha".

En particular este grupo de países reafirmó el derecho de acudir al Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), con el fin de que los países miembros puedan tener fácil acceso a medicamentos esenciales incluidos aquellos para combatir el HIV, la tuberculosis y la malaria y que el

Acuerdo sobre los ADPIC no sea interpretado de tal forma que ponga en peligro la seguridad alimentaria de sus pueblos.

Por su parte, los 34 ministros de los países desarrollados habían acordado en la reunión de la OCDE el pasado 14 de mayo, impulsar una nueva ronda de negociaciones en la próxima Ministerial en Doha. Aunque el documento oficial surgido de esta reunión hace alusión a la necesidad de que los países en desarrollo participen más activamente en el proceso de liberalización comercial con miras a la estimulación económica y el alivio de la pobreza, este no aclara cómo aplicar los cambios sugeridos.

### Los puntos en discusión

Las reuniones informales de la OMC con el fin de delinear el contenido de la Declaración Ministerial de Doha y proveer los parámetros de la Agenda que seguirá la OMC en los próximos dos años, incluyendo la decisión de iniciar una nueva ronda de negociaciones, se han centrado en los siguientes seis puntos de discusión propuestos por el Presidente del Consejo General, Stuart Harbison:

- Visión y declaración de los Ministros respecto a los temas actuales
- Aplicación de acuerdos
- Estado actual de las negociaciones
- Otros elementos del programa de trabajo
- Organización y manejo del programa de trabajo, y
- Asistencia técnica y capacitación

**Declaración de los Ministros.** El 10 de mayo se iniciaron las reuniones para abordar el primer punto de la Agenda, cuyo propósito es generar un comunicado político que preceda la Declaración Ministerial. Una de las propuestas con mayor resonancia fue la de Brasil, respaldada por Argentina, India y el Grupo de África. Esta propuesta reitera la importancia de temas como la salud pública, los precios de los medicamentos y los cambios en los derechos de propiedad intelectual (DPI). Para Brasil estos temas deberían estar contenidos en una decisión ministerial y se debería seguir un programa de acción al respecto.

Otros temas que seguramente van a sobresalir en el comunicado político de la Declaración de Doha son: la creciente importancia que lleva el adoptar políticas de desarrollo sostenible y la percepción de que los acuerdos de la Ronda de Uruguay han desatado un gran déficit en términos de desarrollo.

*Continúa en la página 8*



Nuevos temas de controversia. Los temas más controversiales respecto al programa de acción fueron tratados en la reunión informal del 15 de mayo. Estos 'nuevos temas de controversia' incluyen los "Temas Singapur" (inversión, políticas de competencia, transparencia en las compras gubernamentales y la facilitación del comercio) denominados así tras la Conferencia Ministerial de la OMC realizada en 1996 en Singapur, así como otros temas propuestos por miembros con interés de negociación. La respuesta y reacción ante estos nuevos temas determinará la posibilidad o necesidad de impulsar una nueva ronda de negociaciones en Doha.

La reunión del 15 de mayo también cubrió la mayoría de estos temas, y como era de esperarse las discusiones relacionadas al comercio y a la inversión produjeron más debate que las de otras áreas. En el tema de inversión y políticas de competencia continúa la polarización entre países desarrollados y en desarrollo.

Por ejemplo, India sigue considerando que el tema de inversión y las leyes a las cuales los países deben adherirse en un mundo más integrado, no deben ser determinadas por la OMC; como contra parte, la Unión Europea (UE) considera de suma importancia incluir el tema de la inversión en la próxima reunión Ministerial. EE.UU. por su parte, expresó su apoyo a una nueva ronda que por el momento excluya el tema de la inversión y la política de competencia y se enfoque más hacia temas como agricultura, servicios, aranceles industriales, transparencia y quizá cambios al Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC.

En materia de anti-dumping, EE.UU. no ha dado señales de aceptar este tema en futuras negociaciones. Este punto siempre ha sido de gran importancia para los países en desarrollo y hasta la UE y Canadá han mostrado indicios de querer discutirlo en el marco de la OMC.

Aplicación de los Acuerdos. Los debates relacionados con la aplicación de los acuerdos se intensifican a medida que la Ministerial de Doha se aproxima. No obstante, las sesiones especiales de la Asamblea General preparatoria para la Ministerial han sido poco fructíferas en este campo, lo cual implica que las críticas de los países en desarrollo sobre el modo como se realizaron los acuerdos de la OMC difícilmente serán tomadas en cuenta antes de la Ministerial.

Una gran mayoría de los países en desarrollo considera que el Mecanismo de Aplicación de Acuerdos debe ser enmendado y revisado. Por su parte India, Pakistán, Malasia y Zimbabwe se muestran reacios a aplazar este punto hasta una próxima ronda de negociaciones. Malasia indicó que una revisión al Mecanismo de Aplicación de Acuerdos impactaría enormemente el proceso preparatorio para Doha; Pakistán afirmó que el proceso de revisión dependería de las acciones tomadas en el área de textiles que registran poco progreso; y Zimbabwe aludió a la importancia de hacer obligatoria cualquier provisión o trato especial en esta materia. Brasil indicó

que la creciente oposición de la sociedad civil hacia el libre comercio y la OMC es un resultado directo del desequilibrio en materia de acuerdos que cada vez se hace más aparente entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo.

Por su parte la UE y Japón coincidieron en que cualquier cambio en materia de aplicación de anteriores acuerdos sólo sería viable en el marco de nuevas negociaciones. Así, la posibilidad de nuevas negociaciones quedó sujeta a que se lance una nueva ronda en Doha.

### **Adhesión de China**

A pesar de los recientes roces en materia de política de defensa y seguridad, EE.UU. y China han llegado a un acuerdo para la adhesión de China a la OMC. Paralelo a la reunión de la APEC llevada a cabo el 6 y 7 de junio en Shanghai, el Representante Comercial de los EE.UU., Robert Zoellick y el Ministro de Comercio Exterior chino, Shi Guangsheng, lograron llegar a un consenso respecto a las diferencias bilaterales que hasta ahora han pospuesto la entrada de China a la OMC.

En el pasado el mayor obstáculo a las negociaciones bilaterales entre China y EE.UU. era el tema de los subsidios a la agricultura. EE.UU., por su parte, demandaba que China limitase sus subsidios agrícolas a un máximo de 5 por ciento, nivel al cual se comprometieron los países desarrollados. China, por el contrario, insistía en un 10 por ciento. De cualquier forma, la mayoría de los socios comerciales consideraban que aún un nivel bajo de subsidios agrícolas por parte del gobierno chino, produciría distorsiones en el comercio internacional, ya que este país cuenta con una población rural de casi 900 millones y una producción agrícola de igual magnitud.

Ambos países mantuvieron en confidencialidad los detalles del acuerdo, pero el 15 de junio pasado circuló un comunicado indicando que el nivel de subsidios acordado en la reunión fue de un 8.5 por ciento. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación dicen que el acuerdo se concretó una vez que China accedió a cancelar algunos subsidios que sirven de incentivo a la producción de ciertos cultivos.

Otros obstáculos que se presentan en el camino de China hacia la OMC son las restricciones y barreras de entrada a los mercados chinos de seguros y ventas al por menor; las salvaguardas específicas de las que aún gozan algunos productos; su política industrial, incluyendo los subsidios; compromisos en medidas sanitarias y fitosanitarias y barreras técnicas al libre comercio.

Estos nuevos acontecimientos han generado reacciones por parte de otros países en cuanto a la adhesión de China a la OMC. El Representante de la UE, Pascal Lamy, indicó que tratará de llegar rápidamente a un consenso en cuanto a las diferencias restantes entre la UE y China, para acelerar la adhesión. Por su parte, el presidente mexicano, Vicente Fox, mencionó durante su visita al país asiático del 6 al 9 junio pasado, que cedería su posición frente a la entrada de China a



*Continuación de la página 8*

la OMC. Hasta el momento, China ha firmado tratados bilaterales con todos aquellos países que han demostrado interés de negociar, excepto con México. Los acuerdos entre China y México se han retrasado principalmente por el temor de México respecto a las políticas anti-*dumping* de ese país y la definición de los plazos para la eliminación de restricciones a ciertas importaciones procedentes de China.

Las discusiones del Grupo se reanudarán a principios de septiembre cuando se pretende endosar formalmente el paquete de adhesión de China. Sin embargo, a pesar de los adelantos en materia de negociaciones, será difícil para China lograr una adhesión a la OMC a tiempo para la Ministerial en Doha, ya que la OMC debe producir un complicado documento de protocolo que puede tomar hasta seis meses. Se espera que China entre a la OMC a principios del próximo año.

### **Consejo de los ADPIC debate sobre Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos**

A raíz de la petición del Grupo de Africa en la pasada reunión del Consejo sobre los ADPIC, se celebró el 20 de junio un debate especial en torno a 'propiedad intelectual y acceso a los medicamentos', discusión que ha tomado mucha fuerza tras la creciente polémica sobre el alto costo de los medicamentos requeridos para combatir enfermedades como el SIDA en países en desarrollo.

La OMC ha sido fuertemente criticada por obstaculizar el acceso de medicamentos más baratos y de marcas genéricas a los países en desarrollo, mediante su política de protección de patentes farmacéuticas. Esto ha generado una amplia protesta internacional a raíz de la demanda de varias compañías farmacéuticas al gobierno de Sudáfrica por permitir la importación y fabricación de genéricos más económicos. Después de que las compañías farmacéuticas perdieran esta disputa, la atención se ha volcado hacia otro conflicto similar entre EE.UU. y Brasil por el régimen de protección de patentes de este último.

Bajo las actuales leyes, los países miembros de la OMC -excepto algunos de los más pobres-, deben proteger las patentes internacionales, incluyendo las de nuevos medicamentos. Esto requiere la compra de medicinas a precios establecidos por las compañías farmacéuticas. La industria farmacéutica alega que el alto precio de dichos medicamentos es necesario para recuperar el costo de inversión asociado con la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. La OMC atribuye ciertas exenciones bajo circunstancias que se cataloguen como 'emergencias de salud', pero los países en desarrollo quisieran más flexibilidad y transparencia en estas condiciones.

Por su parte la OMC reconoce que ciertos problemas en torno a esta polémica deben ser discutidos y negociados; pero a su vez considera que cualquier avance en esta materia, será marginal si no es discutido bajo el marco de una nueva ron-

da de negociaciones. La OMC ha reconocido como de 'especial atención' los siguientes cuatro puntos:

- Atracción de financiamiento internacional para garantizar el suministro de los medicamentos más esenciales;
- Fijación de un mecanismo de diferenciación de precios de medicamentos esenciales, que reconoce la importancia de asistencia sanitaria a los países pobres;
- ¿Cómo evitar el efecto contraproducente de tener precios más altos en los países desarrollados, y así prevenir desviaciones comerciales? Y, finalmente,
- ¿Cómo operaría el mecanismo de fijación de precios en países de ingresos medios y en la población pobre de los países desarrollados?

Al finalizar la reunión del Consejo sobre los ADPIC el pasado 20 de junio, el Director General, Mike Moore, presentó una declaración sobre el debate en torno a los derechos de propiedad intelectual y el acceso a medicamentos. En el comunicado la OMC expresa su preocupación por la crisis que enfrentan muchos países en desarrollo en materia de salud y propagación de enfermedades y exaltó la importancia que tiene el Acuerdo sobre los ADPIC para encontrar soluciones al problema. No obstante, se reconoce que el acuerdo podría mejorarse; pero, señala el comunicado, esto debe realizarse en el marco de una nueva serie de negociaciones.

En la más reciente reunión del Consejo de los ADPIC a finales de julio, EE.UU. reiteró su punto de vista que el Acuerdo ofrece suficiente flexibilidad a los países para alcanzar sus objetivos de salud pública e hizo un llamado a los críticos para que presenten pruebas que demuestren que la protección de patentes afecta negativamente el acceso a medicinas.

Por su parte, el Grupo de Africa presentó un número de elementos para la Declaración de Doha, incluyendo la propuesta de una moratoria a todas las acciones en disputa que prevendrían o limitarían la capacidad de los miembros a promover el acceso a medicinas y proteger la salud pública.

El Consejo de los ADPIC se reunirá de nuevo del 19 al 25 de septiembre y dedicará un día a este tema.

### **UE propone nuevas regulaciones para Organismos Genéticamente Modificados**

Finalmente, el pasado 25 de julio la Comisión Europea dio a conocer sus propuestas para rotular y controlar el rastreo de organismos genéticamente modificados (OGM) contenidos en productos de venta pública, lo cual llevaría al fin de la moratoria de facto impuesta desde mediados de 1999 sobre estos. Esta propuesta se suma a las revisiones aprobadas a la directiva europea sobre la liberación deliberada de OGM al medio ambiente.

Las nuevas regulaciones obligarían a que todos los alimentos que contienen OGM lo anuncien en sus etiquetas, incluyendo

*Continúa en la página 14*

### **Malasia pierde en caso "Camarón-Tortuga"**

En la más reciente reunión del Organo de Apelaciones a finales de julio, Malasia anunció su intención de apelar la decisión de la OMC en este caso que establecía la concordancia de la legislación estadounidense con los informes del panel. En una reunión anterior, el Organo de Apelaciones ya había rechazado la objeción presentada por Malasia respecto a la manera como EE.UU. implementó una resolución anterior en el caso camarón-tortuga. En su apelación, Malasia expresaba su desacuerdo con la medida de prohibir importaciones de camarón capturado por embarcaciones carentes de un dispositivo para excluir a las tortugas (DET) de sus redes de pesca, política que continua siendo administrada por los EE.UU. y hace parte de su legislación. En el documento de apelación, Malasia sostiene que "mientras EE.UU. no retire las sanciones sobre la importación de camarones y adopte medidas comerciales no restrictivas, el país estará evadiendo las recomendaciones del Organo de Solución de Diferencias de la OMC.

Antes de dicha disputa en la OMC, los exportadores de camarón solo podían entrar al mercado estadounidense si usaban DET. En 1998, el Organo de Apelación de la OMC dio por justificada la prohibición de estas importaciones bajo el Artículo XX(g) del GATT, pero condenó varios aspectos discriminatorios de la medida.

Después de dicho veredicto, EE.UU. cambió varios aspectos de su política de aplicación de la certificación de países y empresas pesqueras. Esto causó gran revuelo entre grupos ambientalistas estadounidenses que apelaron la decisión ante un tribunal. El veredicto de dicha apelación sigue pendiente.

Los documentos presentados por parte de EE.UU. al Organo de Apelación también resaltan la labor de este país en las negociaciones para un Acuerdo del Océano Índico y la Región del Este Asiático sobre la Conservación y Manejo de las Tortugas Marinas y su Hábitat, y destaca sus esfuerzos para proveer ayuda técnica en materia de construcción, instalación y operación de las DET.

Las discusiones de este y otros casos en el Organo de Solución de Diferencias continuarán en septiembre.

### **Banano: UE y Ecuador logran Acuerdo**

La Unión Europea finalmente adoptó un nuevo régimen de importación de banano tras resolver sus diferencias con Ecuador el pasado 30 de abril, diferencias que tenían que ver con los criterios que rigen la categoría de 'recién llegado' (bajo el régimen de primer llegado, primer servido)

y los requisitos para obtener licencias de importación. En las negociaciones Ecuador trató de asegurar que la mayor cantidad posible de sus comercializadoras de pequeñas y medianas empresas fuera incluida bajo esta categoría, que reserva el 17 por ciento de sus licencias para aquellos operadores que entraron al mercado europeo después de 1993. La mayoría de las licencias, cerca del 83 por ciento, será entregada a 'distribuidores tradicionales' con base en la porción del mercado que controlaban entre 1994 y 1996. Esto indica que la mayoría de licencias será destinada a compañías multinacionales.

Ecuador, mayor productor mundial de la fruta, fue el único país que se mostró insatisfecho respecto al acuerdo alcanzado entre EE.UU. y la Unión Europea el pasado 11 de abril. El nuevo reglamento que delinea el manejo del régimen de importación del banano, fue institucionalizado el primero de julio, fecha que EE.UU. levantaría las sanciones comerciales que impuso a los países de la UE desde 1990 y que según estimaciones, alcanzaron los 200 millones de dólares.

En una noticia más reciente, el 25 de julio la Comisión Europea llamó la atención a Francia por no cumplir con el acuerdo con EE.UU. y amenazó con llevar el asunto a la Corte de Justicia europea. Francia permitió la entrada de 50,000 toneladas de banano de América Latina a una tasa de importación reducida, cuando solo podía importar 4,000 toneladas bajo el acuerdo.

### **EE.UU. reitera objeción a leyes de DPI en Brasil**

A pesar del creciente apoyo, tanto por parte de la comunidad internacional como de los miembros de la OMC, para asegurar que las normas de protección de la propiedad intelectual no obstaculicen el acceso a medicamentos más económicos por parte de los países en desarrollo, EE.UU. ha decidido proseguir su disputa ante la OMC contra la legislación brasileña en materia de propiedad intelectual.

El Artículo 68 de la ley brasileña, que establece "requerimientos de contenido local" a las industrias manufactureras, generalmente ha sido usado por compañías farmacéuticas que producen medicamentos genéricos más baratos, especialmente para combatir el SIDA. Sin embargo, la legislación fue recientemente censurada por el representante comercial de EE.UU., Robert Zoellick, ya que esta no sólo ampara a la industria farmacéutica brasileña, sino a todas las industrias manufactureras del país.

A pesar que desde febrero se estableció un panel de consulta para tratar el tema, hasta ahora los tres panelistas no han sido escogidos.

## Mercosur firma el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente

Durante la XX Reunión Cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay<sup>1</sup> se firmó el acuerdo marco sobre medio ambiente del bloque regional, que asume el compromiso de asegurar el desarrollo sustentable trazando las líneas de acción, para que cada uno de los países del Mercosur pueda establecer políticas ambientalmente sustentables.

Se incorpora la dimensión ambiental en el Mercosur, considerando la necesidad de contar con el marco jurídico para reglamentar las acciones de protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.

### El contexto económico del Acuerdo Marco

Las secuelas derivadas de las dificultades económicas de los últimos años han provocado un entorpecimiento de las negociaciones comerciales hacia el interior del Mercosur, hasta el punto de desestabilizar las negociaciones del bloque. Es al momento de celebrar su décimo aniversario, el 26 de marzo de 2001, que ha sufrido la peor de las crisis: Argentina tuvo que suspender el arancel externo común del Mercosur, afectando así la naturaleza constitutiva de la unión aduanera. Brasil aceptó, como medida transitoria, abolir los gravámenes a la importación de bienes de capital y elevar, a la vez, el arancel de los bienes de consumo a un 35% - que antes se configuraban en un promedio del 14% - para superar la parálisis de la Argentina. Tanto Paraguay como Uruguay estuvieron por fuera de esta decisión, demostrando nuevamente que los dos grandes del acuerdo toman sus decisiones en forma bilateral.

Este remedio significa un retroceso en la formalización de la unión aduanera que se dirige una vez más hacia un área de libre comercio. La situación actual supone a su vez el debilitamiento de la posición negociadora del bloque frente a otros bloques o países, especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea.

Los magros logros que deja el concierto de medidas económicas tras diez años de la firma del Tratado de Asunción nos hacen afirmar que el resultado obtenido en lo ambiental puede ser considerado, sin duda, un avance exitoso.

También se debe advertir que la tendencia global pudo más que la propia dinámica de la región en la inclusión de un acuerdo ambiental en un momento opacado del Mercosur.

<sup>1</sup> Mercosur/CMC/Dec. N° 2/01- Asunción, 22/VI/01.

<sup>2</sup> El GMC instruyó al SGT 6 a efectuar una amplia revisión, antes de julio de 2001, con base a lo siguiente: a) reafirmación de los Principios de la Declaración de Río, b) compromiso de los Estados Parte para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en materia ambiental, c) compromiso de los Estados Parte de explorar la instrumentación y aplicación de los Principios de Río que no han sido objeto de convenios internacionales, d) compromiso de los Estados Parte de iniciar el análisis de los problemas ambientales de la subregión con miras a la cooperación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

### Análisis del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente

Este acuerdo surge en el ámbito de la IV Reunión Extraordinaria, en Florianópolis, del Subgrupo de Trabajo N°6 Medio Ambiente del Mercosur, que se llevó a cabo el 13 y el 14 de marzo de 2001. Allí se acordaron las bases del mismo que sigue, casi al pie de la letra, los lineamientos dados en la XX-XIX Reunión del Grupo Mercado Común de septiembre 2000 en Brasilia<sup>2</sup>.

Aprobado por el Consejo Mercado Común durante la XX Reunión Ordinaria el 22 de junio en Asunción, se convertirá en Tratado una vez ratificado por los países del Mercosur. Es ilustrativa la redacción de los considerandos de la Decisión N° 2/01 CMC que se refieren a la "importancia de la temática ambiental en la agenda de consolidación y profundización del Mercosur, el carácter fundamental de posibilitar el desarrollo sustentable mediante la cooperación entre los Estados Partes con vistas a mejorar la calidad ambiental en la región y la necesidad de contar con un marco jurídico para reglamentar las acciones de protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales del Mercosur".

### Contenido del Acuerdo

En su Preámbulo se resalta la necesidad de cooperar para la protección del medio ambiente y la utilización sustentable de los recursos naturales con vistas a un desarrollo económico, social y ambiental sustentable.

Se reconocen los beneficios de la *participación de la sociedad civil* dirigida a la protección del medio ambiente y la importancia de la cooperación entre los países miembros con el objetivo de apoyar y promover la *aplicación de sus compromisos ambientales* internacionales en congruencia con las legislaciones y políticas nacionales.

Es importante la mención que reafirma los preceptos de la Agenda 21, y la complementación de las políticas comerciales y ambientales destacando la importancia de establecer un marco jurídico que facilite la efectiva protección del medio ambiente.

Los Principios se enuncian en el Capítulo I que consta de tres artículos; por un lado la reafirmación de los principios de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Art. 1). Por otra parte, establece que los estados analizarán la posibilidad de instrumentar la aplicación de los principios que no hayan sido objeto de tratados internacionales hasta ahora (Art. 2). Esta norma no puede ser más tenue en su formulación.

El Artículo 3 prevé seis orientaciones básicas: la promoción de la protección del medio ambiente mediante la coordinación de políticas sectoriales hacia el fortalecimiento de la integra-

*Continúa en la página 12*

*Continuación de la página 11*

ción, siempre y cuando se evite la adopción de medidas que restrinjan o distorsionen la libre circulación de bienes y servicios -de manera arbitraria o injustificada-; se establece el tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas ambientales; se repite ahora por segunda vez la promoción de una efectiva participación de la sociedad civil y se agrega al final que lo único que podemos considerar como normativa, aunque leve en su enunciación, es la ‘internacionalización de los costos ambientales’. El inicio de la frase es lo que más fragilidad le concede, al establecerse como ‘fomento’, cuando la formulación correcta debería ir hacia ‘la inclusión del costo ambiental en los procesos productivos’.

El Capítulo II que consta de un solo artículo (Art. 4) menciona que el objeto del acuerdo será la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable mediante el juego de las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Es en esta dirección en la que debemos avanzar.

El Capítulo III consta de 3 artículos y establece *la cooperación entre los Estados y la participación de la sociedad civil*, detallando en el Artículo 6. catorce acciones a aplicar, entre ellas el intercambio de información, el incentivo de políticas, la armonización, la identificación de fuentes de financiamiento, la promoción de condiciones de trabajo ambientalmente saludables y seguras, la consideración de aspectos ambientales en distintos foros, la adopción de políticas y procesos productivos no degradantes. También agrega que es bueno incentivar la investigación científica y el desarrollo de tecnologías limpias, promover el uso de instrumentos económicos de apoyo hacia la ejecución de políticas de protección ambiental, además de armonizar normas con el objeto de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales especialmente en áreas fronterizas. Menciona, por otra parte, que se deberá informar sobre los desastres y las emergencias ambientales; dos acciones que forman parte del acuerdo sobre emergencias ambientales que ha sido revisado y mejorado sustancialmente.

El próximo párrafo trata sobre la educación ambiental, y por último propone en su acción final – en el extenso y frágil Artículo 6- el desarrollo de acuerdos sectoriales en acuerdos específicos para la necesaria consecución del objeto del acuerdo marco.

En el Artículo 7 sugiere acordar a futuro, formas de trabajo para las áreas temáticas previstas en el Anexo del acuerdo marco aclarando que estas son meramente de carácter enunciativo. Sin duda, las áreas temáticas que se proponen en el anexo son el punto de partida y el elemento determinante de éste acuerdo.

Se establecía en el Protocolo que las controversias que surgieran de la aplicación, interpretación o incumplimiento del protocolo, deben ser resueltas ‘mediante negociaciones diplomáticas directas’ y si no se llegara a un acuerdo se aplicará el Protocolo de Brasilia<sup>3</sup> para la Solución de Controversias. El Capítulo IV esboza que las controversias que surgie-

ran entre los Estados Parte respecto de la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contempladas en el presente acuerdo serán resueltas por medio del Sistema de Solución de Controversias vigentes en el Mercosur.

### **Conclusión**

El acuerdo ambiental de Mercosur es el inicio de un proceso de efectiva creación de una política ambiental sustentable para la región. La búsqueda deberá centrarse en la real aplicación de las normas que están delineadas en el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente y la incorporación de herramientas significativas para el logro de los objetivos propuestos. El Acuerdo Marco puede encontrar en los procesos de negociación de otros acuerdos elementos y ejemplos para tratar diferentes aspectos. Por ejemplo, el proceso de negociación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad ofrece un modelo de transparencia y de como llevar adelante una efectiva participación de la sociedad civil. Por otro lado, el Principio Precautorio, formulado en su mejor manera en el Protocolo de Bioseguridad, es el gran ausente del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente lo que se podría considerar un retroceso dada la importancia que ha tomado el tema en las agendas de comercio internacional y medio ambiente.

Finalmente, para el cumplimiento efectivo de los objetivos del Acuerdo Marco es necesario que se lleven a cabo las siguientes acciones:

- Establecer un modelo efectivo de desarrollo sustentable de la región uniendo los vínculos entre medio ambiente, crecimiento económico y equidad social para obtener los beneficios a largo plazo que incluya a todos los sectores de la sociedad.
- Realizar las Evaluaciones de Sustentabilidad del Mercosur, es decir, efectuar el análisis de los impactos, directos e indirectos, del Tratado de Asunción, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente y la legislación complementaria sobre el desarrollo sustentable del bloque.
- Involucrar a todos los sectores sociales con espíritu de Responsabilidad Compartida hacia el establecimiento de los mecanismos necesarios para el acceso de los particulares a los sistemas de control y el derecho de los mismos de invocar a su favor los contenidos de la normativa existente.
- Establecer en el ámbito regional las Estrategias que den cumplimiento a los temas propuestos en el Anexo del Acuerdo Marco sobre la Gestión Integrada y Sustentable de los Recursos Naturales, Calidad de Vida y Planeamiento Ambiental, Instrumentos de Política Ambiental y el desarrollo de Actividades Productivas Ambientalmente Sustentables.
- Revisión de la institucionalidad ambiental en la estructura orgánica del bloque, re-definiendo roles, funciones, grados de autonomía en la creación y aplicación de normas, y coordinación entre un ente regional, más fuerte que el actual y conformado con la sociedad civil que coordine con las instancias ambientales nacionales. Podríamos adelantarnos y dar un real avance si se crea la Comisión Ambiental del Mercosur.

<sup>3</sup> El Protocolo de Brasilia está actualmente en etapa de revisión para ser definitivamente mejorado.

*Preparado por María Lechner Reynal, Directora Ejecutiva de Fundación ECOS, Punta del Este, Uruguay. Para mayor información, contactarse al tel - /fax: (598-42) 771-252/772-212/771-532, email: lechner@fundacionecos.org*

## **Acuerdo sobre cambio climático en la CoP-6ii**

El pasado mes de julio durante la continuación de las negociaciones del VI Período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CoP-6 2da parte) al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en Bonn, Alemania, 178 países finalmente acordaron adoptar las reglamentaciones del Protocolo de Kioto. El Protocolo, cuyo proceso de ratificación debe concluir para el 2002, pretende reducir en un promedio del 5,2 por ciento, por debajo de los niveles de 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2012. EE.UU. fue el único país que no ratificó el Protocolo.

Hasta ahora, EE.UU. ha rechazado el Protocolo por temor a que tenga consecuencias negativas en su economía, posición que se agrava con la reciente decisión de asumir una política energética que acelere la utilización de fuentes fósiles de energía como el petróleo, el carbón y el gas. La nueva política del Presidente Bush con respecto al cambio climático implica la reducción voluntaria, de emisiones de gases y urge la inversión en tecnologías limpias.

En la reunión de la CoP-6 2da parte, el texto final que delinea los elementos principales del Protocolo de Kioto se desarrolló mayormente con base en la propuesta presentada por el Presidente de la CoP-6 y Ministro del Ambiente holandés, Jan Pronk. Se llegaron a varios acuerdos y el punto de mayor discusión fue en torno al mecanismo de cumplimiento del Protocolo. Los países acordaron:

- Permitir la utilización de los sumideros de carbono para cumplir con los objetivos de las cuotas de emisiones de gas invernadero entre 2008-2012 (el primer período), antes estableciendo cuotas por país para asegurar que solo representen una fracción de la reducción de emisiones;
- Adoptar la reglamentación para la aplicación de los "Mecanismos de Kioto" (i.e. el Mecanismo de Desarrollo Limpio, la Implementación Conjunta, el Comercio de Emisiones) con un énfasis en la acción nacional como un elemento significativo del esfuerzo por parte de los países industrializados por alcanzar sus objetivos de emisión;
- Establecer un fondo especial de cambio climático, un fondo para los países menos adelantados en el marco del CMNUCC y un fondo de Adaptación al Protocolo de Kioto para financiar concretamente proyectos de adaptación;
- Seguir un régimen que facilite y refuerce el cumplimiento y que disminuya las emisiones permitidas a los países que no cumplan con su cuota durante el segundo período de aplicación del Protocolo.

Tras llegar a estos acuerdos significativos, existe una mayor probabilidad que el Protocolo entre en vigor antes de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Río+10) en septiembre del 2002. El Protocolo de Kioto entraría en vigor aunque no se adhiera EE.UU., si lo ratifican al menos 55 países, que sumarían más del 55 por ciento del total de las emisiones de gas carbónico en 1990 de este grupo. Sin embargo,

varios expertos estiman que los objetivos de Kioto no podrán alcanzarse sin la participación de EE.UU., que en 1990 emitió el 36 por ciento del total de gases de efecto invernadero.

*Para mayor información sobre la CoP-6 2da parte, visite la página web de la Secretaría: [www.unfccc.de/sessions/cop6\\_2/](http://www.unfccc.de/sessions/cop6_2/)*

## **Se firma el acuerdo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes**

El pasado 23 de mayo los Delegados de 91 países y la Comisión Europea firmaron en Estocolmo, Suecia, el Acta Final de la Conferencia Plenipotenciaria para la adopción del Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). El acuerdo se viene negociando desde 1998 y pretende proteger la salud humana y el ambiente controlando la producción y distribución de 12 productos químicos que se ha demostrado que son peligrosos, como el DDT y las dioxinas.

*Para mayor información sobre la reunión y los países que firmaron el acuerdo, visite la página web de la Secretaría: <http://irptc.unep.ch/pops/>*

## **Negociaciones del Compromiso Internacional sobre recursos fitogenéticos**

El VI Encuentro del Grupo de Contacto de la Comisión de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (CGRFA, por sus siglas en inglés) de la FAO, se realizó del 23 al 28 de abril en Spoleto, Italia. El propósito de la reunión fue continuar con la revisión del Compromiso Internacional en esta materia. Al final del encuentro se obtuvieron progresos marginales en el ámbito técnico.

El principio del Compromiso Internacional (CI) es desarrollar un marco jurídico que gobierne el acceso y el uso de una gran colección de germoplasma que se encuentra en 17 centros internacionales de investigación agrícola, cuya operación está actualmente auspiciada por la FAO. El mandato del CI, puesto en marcha por la CGRFA en 1993, es crear un régimen equitativo y justo en cuanto a la distribución de los beneficios de los recursos fitogenéticos de alimentación y agricultura, que además esté en armonía con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). La revisión del CI está en marcha con el objetivo de establecer un Sistema Multilateral (SM) de Acceso y Distribución de Beneficios que "facilite el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y agricultura, y a su vez, que promueva la distribución de los beneficios resultantes de la utilización de dichos recursos, en una forma equitativa y justa". El SM cubrirá los recursos genéticos que se encuentran bajo el control de los centros internacionales de investigación de la FAO, así como otros recursos ofrecidos voluntariamente por instituciones internacionales, nacionales o privadas.

Los Delegados del CGRFA acordaron que los beneficios a partir bajo el marco del SM incluirán el intercambio de información, el acceso a la tecnología y su transferencia, programas de capacitación científica y técnica y los beneficios obtenidos de su comercialización. De especial importancia para los países

*Continúa en la página 15*

*Continuación de la página 9*

alimentos derivados de OGM que ya nos los contengan como el caso de productos altamente refinados en los cuales el contenido original de OGM ha sido eliminado durante el proceso productivo (v.g. maíz o aceite de soya). Según esta regulación el margen de error aceptable por la presencia accidental de OGM es del uno por ciento –lo cual ocasionó la crítica de *Greenpeace*-. Esta excepción también se aplicará para el uso de OGM no aprobados para propósitos alimentarios, siempre y cuando estos hubieren recibido un informe favorable por parte del Comité Científico de la UE. El proceso de aprobación para los productos alimenticios que contengan OGM se centralizará en la Autoridad Alimentaria Europea (EFA, por sus siglas en inglés). Una vez que el producto sea juzgado como seguro por esta autoridad, la Comisión y los representantes de los países miembros decidirán si permiten su uso y bajo qué condiciones.

El representante comercial de EE.UU., Robert Zoellick, criticó abiertamente esta propuesta y dijo que "esta crea barreras regulatorias onerosas y poco prácticas y se extiende más allá de la protección a la salud de los consumidores". Señaló además, que, de aprobarse, estas regulaciones detendrán los esfuerzos de los países en desarrollo para mejorar la nutrición, bajar los costos de los alimentos y reducir la dependencia de los pesticidas, a través de la biotecnología. EE.UU. y otros países exportadores de OGM como Canadá y Argentina temen que el sistema europeo pueda afectar sus exportaciones y consideran que puede contrariar las normas de la OMC.

### **OMC y PNUMA discuten interacción entre los AMUMA y normas comerciales**

A finales del pasado mes de junio, la OMC y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) organizaron un par de reuniones con la participación de oficiales de gobierno de los ministerios de comercio y medio ambiente de los países miembro, la OMC y las Secretarías de ocho acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA), entre ellos los de cambio climático, biodiversidad, ozono, comercio de especies en peligro y contaminantes orgánicos persistentes. El propósito de estas reuniones fue el de discutir sobre la interacción entre la OMC y los AMUMA, y en particular sobre el potencial conflicto entre los marcos jurídicos ambiental y comercial a nivel internacional.

La primera reunión fue organizada por el PNUMA para discutir sobre el mejoramiento de la aplicación de los AMUMA como forma de tratar más efectivamente sus vínculos con el comercio y las normas comerciales. Las discusiones se dieron en el contexto de la próxima Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se realizará en Johannesburgo en septiembre del 2002, y que, según palabras del Director Ejecutivo del PNUMA, Klaus Toepfer, "ofrece una oportunidad para los líderes de promover una relación constructiva entre los sistemas mundiales de gobernabilidad económica y ambiental". Durante la reunión se identificaron los puntos de sinergia y conflicto entre el sistema multilateral de comercio y los

AMUMA. Entre los puntos de conflicto se identificaron posibles problemas de jurisdicción y asuntos a tratar, mientras que entre las sinergias se identificaron el papel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) para mejorar la aplicación de los AMUMA y la importancia de los procedimientos de notificación para generar una mayor transparencia y control tanto dentro de la OMC como en los AMUMA.

La segunda reunión fue organizada por el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) de la OMC y dirigida por su presidente, el Embajador chileno Alejandro Jara. Las discusiones se desarrollaron sobre la base de la reunión del PNUMA y generaron un debate sobre el nivel de importancia que se debería dar al tema ambiental en la IV Reunión Ministerial de la OMC en Doha, Qatar este noviembre. Algunos miembros mostraron su interés en tratar varios asuntos ambientales en Doha, mientras otros mostraron oposición a que se discutan más asuntos ambientales de lo que ya se está tratando. Además, se discutieron los siguientes temas:

**Bienes prohibidos nacionalmente.** El control de la importación de bienes que están prohibidos en los países de origen ha sido un tema muy importante para varios países, en particular del continente africano. El Consejo de lo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas presentó durante la reunión una lista consolidada más reciente, sobre la cual los miembros destacaron la importancia que se distribuya. Sin embargo, algunos miembros, entre ellos Venezuela, India y algunos países africanos, mencionaron su falta de capacidad para controlar el comercio ilegal de estos bienes en relación con la capacitación de los oficiales de aduana y con evitar la corrupción. Se mencionó la asistencia que el Protocolo de Montreal y la Convención de Basilea podrían ofrecer en la capacitación de los oficiales de aduana.

**Ecoetiquetado.** Suiza presentó un documento sobre etiquetado, declarando la necesidad de clarificar las disposiciones sobre barreras técnicas al comercio (BTC) para evitar que surjan barreras al comercio y medidas proteccionistas innecesarias. Mientras que la UE, Japón y Corea apoyaron el documento suizo, la mayoría de los miembros expresaron sus reservas sobre los motivos detrás de la propuesta de clarificar las disposiciones relacionadas a las BTC.

**Pesca.** Este tema fue el que atrajo mayor atención durante la reunión. El grupo de los países conocidos como "Amigos de los Peces" (Australia, Chile, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega y EE.UU., entre otros) abogó por una reforma a los subsidios en el sector pesquero. Por el contrario, la UE, Corea del Sur y Japón insistieron que los subsidios no pueden tratarse fuera del contexto de un plan de manejo pesquero sustentable, tema que está mas bien dentro de la jurisdicción de la FAO.

Finalmente, en preparación a la Ministerial de Doha, empezaron discusiones sobre el papel que el CCMA debería tener para sobrellevar los temas ambientales en una nueva ronda de negociaciones.

AMUMA/Continuación de la página 13

en desarrollo, se discutió el acceso y la transferencia tecnológica y la distribución de los beneficios de la comercialización bajo el contexto de las actuales negociaciones y revisiones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. También cobró gran relevancia dentro de las discusiones el tema del pago de regalías sobre las ganancias resultantes de patentes u otras protecciones comerciales que se garantizan a material fitogenético desarrollado por fuentes que operan bajo el Sistema Multilateral.

A pesar de los avances en algunos temas, el encuentro no logró reducir los desacuerdos entre los países en desarrollo -que demandan un sistema de distribución de beneficios- y aquellos, como EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que continúan reiterando la posibilidad de que esto suscite conflictos con los Artículos 27.1 y 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estos tratan sobre la obligación de otorgar patentes a invenciones sin importar su esfera tecnológica y de proteger las variedades de plantas; y sobre el requerimiento de que excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente no deben "entrar en conflicto irrazonable con la explotación normal de la patente" o "perjudique irrazonablemente los intereses legítimos del dueño de la patente" (Artículo 30).

Otros temas clave sobre los cuales aún no se ha llegado a un consenso, incluyen: a) si el Sistema Multilateral debe incluir colecciones fuera del control gubernamental; y b) si los derechos de propiedad intelectual pueden ser aplicados a genes y/o secuencias genéticas aisladas de los recursos del SM. La próxima reunión de la FAO se realizará en noviembre de este año.

Para mayor información, visite la página web de la Secretaría del CGRFA: <http://www.fao.org/ag/cgrfa/>

Comentarios/Continuación de la página 4

contratantes locales, incluidas comunidades y pueblos, en tanto esta protección conlleva mayores ingresos para las empresas involucradas ante la ausencia de copias y de competencia? ¿Son entonces un mecanismo que en el caso de comercialización permite mayores regalías y por ende contribuye aún más a la distribución de beneficios?

## Conclusiones

La Ley de Biodiversidad de Costa Rica resulta uno de los primeros marcos normativos nacionales en tratar de compatibilizar las obligaciones del CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC. Hasta donde ha sido posible lograr una adecuada armonía entre ambos aún está por verse, debido a la ambigüedad de varias de las disposiciones de la Ley y las diferentes interpretaciones que han surgido sobre la misma. Sin embargo, independientemente de las regulaciones concretas, quizá lo más relevante ha sido la forma como se ha abordado este tópico y las tensiones inherentes al mismo, las cuales continuarán por un buen tiempo, tanto a nivel nacional como internacional.

\* Jorge Cabrera Medaglia es abogado del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica y co-presidente del Panel de Expertos sobre Acceso y Distribución de Beneficios del CDB.

# PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES/BRÜCKEN

buscan proveer información y análisis sobre la intersección entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible para el creciente número de actores de todo el mundo involucrados en el debate. El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y sus organizaciones asociadas reconocen el auspicio del Gobierno Federal Suizo (BAWI) para la publicación de Bridges y el de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur para Puentes y Passerelles.



BRIDGES Between Trade and Sustainable Development es publicado mensualmente por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible.

Director: Ricardo Meléndez-Ortiz  
Editora: Anja Halle  
Dirección: 13 chemin des Anémones 1219 Ginebra, Suiza  
Tel: (41-22) 917-8492  
Fax: (41-22) 917-8093  
E-mail: [ictsd@ictsd.ch](mailto:ictsd@ictsd.ch)  
Web: <http://www.ictsd.org>



PUENTES Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible, la versión para América Latina de BRIDGES, es publicada bimestralmente en colaboración con la Fundación Futuro Latinoamericano.

Coordinador: Nicolás J. Lucas  
Editora: Manuela Botero Thiriez  
Asesora editorial: María Amparo Albán  
Asistentes editoriales: Marijke Hallo de Wolf  
Dirección: Casilla 17-17-558 Quito, Ecuador  
Telefax: (593-2) 920-635/920-636  
E-mail: [flla@fulano.org](mailto:flla@fulano.org)  
Web: <http://www.fulano.org>



PASSERELLES entre le commerce et le développement durable es la versión en francés de BRIDGES, publicada bimestralmente en colaboración con ENDA-Tiers Monde.

Coordinador: Taoufik Ben Abdallah  
Dirección: B.P. 3370, Dakar, Senegal  
Tel: (221) 821-7037  
Fax: (221) 822-2695  
E-mail: [syspro2@enda.sn](mailto:syspro2@enda.sn)  
Web: <http://www.enda.sn>



BRÜCKEN Zwischen Handel und Zukunftsfähiger Entwicklung la versión alemana de BRIDGES, es publicada bimestralmente en colaboración con Germanwatch en Bonn, Alemania.

Cordinador: Rainer Engels  
Tel: (49-228) 60492-0  
Fax: (49-228) 60492-19  
E-mail: [tradewatch@germanwatch.org](mailto:tradewatch@germanwatch.org)  
Web: <http://www.germanwatch.org>

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES/BRÜCKEN son exclusivas de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del ICTSD y las publicaciones. El material de estas publicaciones puede ser utilizado en otras publicaciones con una completa cita de su fuente.

## Bridges Weekly Trade News Digest

Para suscribirse al resumen semanal en inglés del ICTSD de noticias comerciales relevantes para los interesados en Medio Ambiente y Desarrollo, por favor enviar un mensaje a: [Majordomo@igc.apc.org](mailto:Majordomo@igc.apc.org). Dejar "subject" en blanco y en el cuerpo del mensaje escribir: subscribe tradedev. Para copias vía fax y correo, también contactar al ICTSD. También disponible en el sitio electrónico del ICTSD.



Todas las reuniones de la Organización Mundial del Comercio se celebran en Ginebra. Las fechas están sujetas a cambios; rogamos ponerse en contacto con la OMC para confirmarlas. Dirección en internet: [www.wto.org](http://www.wto.org)

## EVENTOS

- Septiembre 3-7 Foro Global sobre Soberanía Alimentaria, Habana, Cuba  
Contacto: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Cuba; tel.: (53-7) 320-268; fax: 328-586; email: [fmsa@anap.org.cu](mailto:fmsa@anap.org.cu)
- Septiembre 4-6 Conferencia sobre la seguridad alimentaria sostenible, Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés) y Gobierno Alemán, Bonn, Alemania  
Contacto: Simone Hill-Lee, IFPRI, Washington DC; fax: (1-202) 467-4439; email: [s.hill-lee@cgiar.org](mailto:s.hill-lee@cgiar.org)
- Septiembre 12 y 14 Evaluación de la Política Comercial – EE.UU.  
Contacto: Lucie Giraud, tel: 5075, fax: 5015
- Septiembre 19-21 Consejo de los ADPIC de la OMC.  
Contacto: Peter Ungphakorn, tel: 5412, fax: 5015
- Septiembre 24-25 Reunión regional preparatoria para la Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible, Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.  
Contacto: Comisión Económica para Europa de la ONU, e-mail: [mary.pat.silveira@unece.org](mailto:mary.pat.silveira@unece.org)
- Septiembre 25 Organo de Solución de Diferencias de la OMC.  
Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761
- Septiembre 25-28 Comité de Agricultura de la OMC.  
Contacto: Peter Ungphakorn, tel: 5412, fax: 5458
- Septiembre 27-28 Comité de Acuerdos Regionales de la OMC.  
Contacto: Jorge Vigano, tel: 5078, fax: 5774

## PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS

ARAYA, Mónica. 2001. "El rechazo del tema ambiental en el ALCA: una taxonomía". Artículo en el Foreign Affairs en Español, mayo-agosto 2001. El documento está disponible en: <http://www.foreignaffairs-esp.org/search/article.asp?i=20010501FaEnEspEs-say4733.xml>.

BRAC DE LA PERRIERE, Robert Ali y Franck Seuret. 2000. "Brave New Seeds. The Threat of GM Crops to Farmers". Zed Books, Londres y Nueva York.

CHARMOVITZ, Steve. 2000. "Opening the WTO to Nongovernmental Interests". Fordham International Law Journal, Vol. 24, Nov-Dic 2000, Nos. 1 y 2.

CLYDE, Hufbauer, Bárbara Kotschwar y John S. Wilson. 2001. "Trade Policy, Standards and Development in Central America". Banco Mundial, Washington, DC.

FAO. 2001. "Genetically Modified Organisms, Consumers, Food Safety and the Environment". UN FAO, Roma.

GILBREATH, Jan. 2001. "The Environment and Trade: Predicting a Course for the Western Hemisphere Using the North American Experience". Center for Strategic and International Studies, Washington, DC.

LARACH, María Angélica. 2001. "El comercio de los productos transgénicos: el estado del debate internacional". Serie de CEPAL sobre Comercio Internacional, No. 10, marzo 2001, Santiago, Chile.

MADELEY, John. 2000. "Hungry for Trade. How the Poor Pay for Free Trade". Zed Books, Londres y Nueva York.

NEUMAYER, Eric. 2001. "Greening Trade and Investment - Environmental Protection Without Protectionism". Eric Neumayer-Earthscan Ltd., Londres.

OXFAM UK. 2001. "Drug Companies vs. Brazil: The Threat to Public Health". Oxfam, Reino Unido. El documento está disponible en: <http://www.oxfam.org.uk/policy/papers/ctcbraz.htm>. Para las versiones en español y portugués, contacte a: Anni Long, e-mail: [along@oxfam.org.uk](mailto:along@oxfam.org.uk). Para información en Brasil, contacte a: Katia Maia, Oxfam GB Brasil, tel: (55) 81-3231-5449, e-mail: [katia@oxfam.org.br](mailto:katia@oxfam.org.br)

SAN MARTIN SANCHEZ DE MUNIAIN, LAURA. 2001. "La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la protección del Medio Ambiente: Aspectos Jurídicos". Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España.

SANTOS DITTO, JOSE. 2000. "Desarrollo Sostenible y Biotecnología". Universidad de Guayaquil, Ecuador.

UNCTAD. 2001. "¿Is the export-led growth hypothesis valid for developing countries? A case study of Costa Rica". En la serie de estudios Policy Issues in International Trade and Commodities de la UNCTAD, No. 7. Nueva York y Ginebra.

VON MOLTKE, Konrad. 2001. "Wither MEA's? The Role of International Environmental Management in the Trade and Environment Agenda". Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), Canadá. El documento está disponible en la página web: [http://www.iisd.org/pdf/trade\\_whither\\_mea.pdf](http://www.iisd.org/pdf/trade_whither_mea.pdf).

WBCSD. 2001. "Sustainable Development through the Market". WBCSD, Ginebra.

## RECURSOS EN INTERNET

Measure of Restrictions on Trade in Services: dos bases de datos sobre las medidas de restricción al comercio de servicios en Asia, Europa, América del Norte y del Sur. Las bases de datos están disponibles en: <http://www.pc.gov.au/research/memoranda/services-restriction/index.html>

Ethical Trading Initiative (ETI). Una alianza de empresas, organizaciones no gubernamentales y sindicatos comerciales que trabajan en conjunto para promover la buena práctica en la aplicación de los códigos y controles laborales y la verificación independiente del acatamiento de las disposiciones de los códigos. Información disponible en: <http://www.ethicaltrade.org/>.

Resumen del Presidente de la Reunión conjunta del PNUMA y la OMC sobre el cumplimiento, la puesta en vigencia y el mecanismo de solución de diferencias en los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA) y la OMC, Ginebra 26 de junio del 2001. La reunión se enfocó en las complementariedades y las diferencias entre estos sistemas en la OMC y los AMUMA. Los documentos relacionados a esta reunión conjunta se encuentran en: <http://www.unep.ch/etu/etp/events/recent/ceds.htm>

